
La vuelta a un día de ochenta mundos

Por Pablo Ospina*

Es completamente cierto, y así lo prueba la historia, que en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez

Max Weber¹

■ “El final”

Una vuelta a ese día de otro mundo

El día viernes 21 de enero a las 15h Jamil Mahuad, entonces Presidente del Ecuador, anunció que no renunciaría. Lo ratificó en la mañana del día sábado 22, cuando ya todas las cartas estaban echadas. Con ello proclamó al mundo que su “abandono” del cargo fue forzado y ratificó de esta forma, simbólicamente, la tan temida ruptura del orden constitucional. Esa madrugada, durante tres horas, pareció dibujarse el perfil de un triunvirato civil y militar, pero no se mantuvo. Lo sucedió Gustavo Noboa, entonces vicepresidente, tal como lo habían venido pidiendo varios dirigentes políticos, desde Rodrigo Borja hasta los dirigentes del Partido Social Cristiano pasando por el propio Oswaldo Hurtado, su coideario y fundador del partido de gobierno. Una salida radicalmente distinta a la buscada por los movimientos sociales y la CONAIE, que pedían la disolución de los tres poderes y su sustitución por un gobierno popular y militar, sustentado en los “Parlamentos Populares”, sede de las decisiones consideradas legítimas.

Cuando conocemos el resultado final de un suceso, solemos interpretar su desarrollo y su origen basados en ese conocimiento. Pero hay que recordar que en su momento los actores desconocían el desenlace final de sus acciones. Sus actos no están informados por ese porvenir todavía incierto. Ese futuro que es aún un proyecto, una intención inacabada. Y este resultado parece favorable a la derecha política ecuatoriana². Gustavo Noboa representa un puente indiscutible con los sectores empresariales costeños, ligados al Partido Social Cristiano (PSC), principal exponente de la tendencia en Ecuador. Ratificó, apenas posesionado, la con-



tinuidad de la dolarización anunciada por su antecesor dos semanas atrás. Todo anuncia que buscará terminar de aplicar, con mejor suerte, las postergadas políticas de ajuste que se han aplicado en el resto de América Latina.

A la vista de tales resultados inmediatos tenemos tendencia a considerar que fue una salida planificada, una hábil maniobra política para forzar la renuncia de un Presidente incómodo e inepto que obstaculizaba, en lugar de facilitar, las políticas de ajuste. Se podría llevar el análisis más lejos: el movimiento social que derrocó a Mahuad podría haber sido un simple peón del PSC o de la cúpula militar que buscaba la renuncia de Mahuad y la sucesión constitucional como medio de encontrar una salida a la crisis.

La práctica de la política es algo distinto. Los dirigentes se mueven en las coyunturas críticas al azar de acontecimientos que nunca controlan del todo y en medio de procesos que eluden la planificación. Al final ni el resultado ni el proceso se parecen a lo que imaginaron³. La derecha quería efectivamente la sucesión presidencial, pero en un ambiente de calma y tranquilidad ciudadanas. La sucesión podía incluso ser concebida como una forma de lograr, al menos temporalmente, esa calma. Controlar la agitación social

y lograr un nuevo acuerdo de gobierno para la aplicación de las tan retrasadas políticas de ajuste. De ninguna manera buscaron, planificaron o desearon un movimiento indígena intransigente y radical; mucho menos un movimiento capaz de influenciar o movilizar a un sector tan vasto de mandos medios del ejército (más de 200 oficiales y mandos medios se encuentran sindicados en los juicios posteriores). De ninguna manera les resultaba conveniente una combinación explosiva de capacidad de movilización social y prestigio moral de que dispone el movimiento indio; con la influencia política de sus demandas en un factor de poder tan importante como las Fuerzas Armadas.

La cúpula militar, por su parte, ha sido acusada de buscar la destitución del Presidente de la República motivada por factores como la inconformidad con el arreglo fronterizo (algo planteado reiteradamente por Jamil Mahuad y por una parte de la prensa peruana); con el manejo torpe y vacilante de las autonomías (una acusación sostenida el día domingo 23 de enero por los dirigentes social cristianos de la costa, radicalmente opuestos a la rebelión); con la reducción del presupuesto militar (algo avanzado por las propias cúpulas militares y por algunos de los sublevados); y con la delirante protección oficial a la corrupción de la banca (el principal tema del discurso público de los sublevados)⁴. Otro elemento mencionado: el acuerdo político entre Mahuad y el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), del ex - presidente Abdalá Bucaram, que incluía (al parecer) su regreso al país desde su exilio en Panamá. Semejante acuerdo levantaba escudos en el PSC y en las propias FF.AA. Aunque estas razones tienen seguramente algo de cierto (y todo parece indicar la existencia de un movimiento interno de disconformidad en los mandos medios conocido y tolerado por la cúpula militar), se puede presumir que los altos mandos militares no querían una fractura institucional de las proporciones alcanzadas en ese viernes interminable. El resultado final tampoco fue de su agrado.

Las polémicas posteriores y las mutuas acusaciones entre funcionarios del gobierno de Mahuad y miembros de la cúpula militar revelan parte de la situación interna y permiten hacer algunas interpretaciones⁵. En estas polémicas han intervenido los generales José Gallardo (ex - Ministro de Defensa), Carlos Mendoza (ex - Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Ministro de Defensa encargado durante la crisis), Vladimiro Alvarez Grau (ex - ministro de Gobierno), Benjamín Ortiz (ex - canciller), Francisco Huerta Montalvo (actual ministro de Gobierno de No-boia) y el General Telmo Sandoval (ex - Comandante en Je-

fe del Ejército y actual Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas). Al parecer a fines de diciembre e inicios de enero Gallardo y Mahuad habrían buscado promover (o al menos considerado la posibilidad de realizar) un “autogolpe” de Estado para dar una salida a la crisis política. Estos intentos realizados en medio de la creciente inconformidad en el seno del ejército serían la explicación de la forzada renuncia de Gallardo y su sustitución por Mendoza en el Ministerio de Defensa. Varias intervenciones parecen corroborar lo que fue un fuerte rumor en su momento. Es evidente que el intento, si existió, era inviable. Incluso si las Fuerzas Armadas hubieran consentido, la falta de credibilidad y la debilidad de Mahuad eran tales que toda salida al “impasse” político creado por la disolución del Congreso habría llevado a una dura resistencia al golpe de mano y a la rápida destitución del Presidente, que tampoco hubiese obtenido apoyo popular en nuevas elecciones parlamentarias. El general José Gallardo y Vladimiro Alvarez, por su parte, acusaron a Carlos Mendoza y a Telmo Sandoval de haber sido parte del complot golpista desde un inicio, o al menos, de haber protegido con su complicidad, a los coroneles agitadores⁶.

“La derecha quería efectivamente la sucesión presidencial, pero en un ambiente de calma y tranquilidad ciudadanas. La sucesión podía incluso ser concebida como una forma de lograr, al menos temporalmente, esa calma.”

Con estos datos podemos hacer algunas hipótesis sobre la posición de los altos mandos en la rebelión. En primer lugar existe una vieja y creciente relación entre las FF.AA y las organizaciones indígenas desde el levantamiento de junio de 1990. Los lazos se han ido reforzando

una vez que los mandos militares superaron el viejo temor respecto a las implicaciones que para la “unidad nacional” podía tener la reivindicación “plurinacional” indígena. La base de estas relaciones es, por un lado, la simpatía que generan las organizaciones indígenas y sus demandas. Por otro, un común malestar por los efectos de las políticas de ajuste estructural en el debilitamiento del Estado, en particular con la posible privatización del sector energético. En efecto, las Fuerzas Armadas ecuatorianas han estado tradicionalmente comprometidas, desde la revolución juliana de 1925, con un modelo de desarrollo donde destaca el rol relevante del Estado como motor y director del proceso⁷.

En segundo lugar, la insatisfacción en el seno de los mandos medios del ejército debió ser compartida en grados diversos por la propia cúpula militar. De hecho, es muy probable que la actitud “contemplativa” ante los signos de rebeldía de estos oficiales medios, que cada vez eran más visibles (como aquellas reuniones de la oficialidad media reseñadas por las notas de prensa, las cartas hechas públicas donde habrían solicitado el recambio presidencial); haya sido la única postura “viable” ante la magnitud de la insatis-

facción. Para desactivar la insatisfacción no era posible una actitud “enérgica” (como la disponibilidad o la exclusión de los oficiales dirigentes), que habría llevado tal vez a un conflicto inmanejable en el Ejército. Ante ello la cúpula probablemente optó por

“Es la movilización indígena y social y el alzamiento de los oficiales jóvenes lo que dio su forma definitiva a la sucesión presidencial. Ambos procesos no fueron alentados ni por la cúpula militar ni por la derecha política, que también se vio sorprendida por el desenlace de los acontecimientos.”

un camino conciliatorio que a la larga se mostró inviable. Es altamente probable que la opción de la renuncia del Presidente haya sido entonces contemplada por la cúpula militar como un camino para *evitar* tanto la ruptura institucional interna (algo que finalmente ocurrió muy a su pesar) como el hundimiento del país en el “caos”. Sabemos ahora, en efecto, que en diciembre la cúpula militar había ya mencionado al Presidente Mahuad la posibilidad de la sucesión presidencial. La renuncia del Presidente permitía salvar ese difícil juego de equilibrios inestables y brindar una salida institucional a la crisis política. Lo seguro es que el alto mando militar nunca quiso ni pudo promover un alzamiento militar como el que finalmente ocurrió. Pero tampoco estaba en posición de reprimirlo violentamente o sofocarlo.

Es la movilización indígena y social y el alzamiento de los oficiales jóvenes lo que dio su forma definitiva a la sucesión presidencial. Ambos procesos no fueron alentados ni por la cúpula militar ni por la derecha política, que también se vio sorprendida por el desenlace de los acontecimientos. En efecto, las consecuencias de la rebelión del 21 de enero sobre la institución armada y la dimensión de la influencia social y moral de las organizaciones indígenas son resultados claramente indeseados por ambos sectores.

¿Cuál fue la lógica que explica la política y las consignas de este movimiento popular? La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) venían proponiendo desde diciembre la destitución de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso Nacional y del Ejecutivo en pleno. Ya entonces la consigna parecía muy ambiciosa y condenada al aislamiento. Pero era una consigna anclada en la experiencia reciente de los resultados de la movilización que en febrero de 1997 destituyó al Presidente Abdalá Bucaram. Resonaba como un eco sordo en todos los discursos el temor a una repetición de febrero. En esa ocasión la movilización social, conducida por los mismos actores, se había resuelto en los espacios institucionales formales. Se había buscado darle una forma “legal” al proceso de destitución⁸. Los dirigentes de las bases indígenas y sociales desconfiaban de la posibilidad de cumplir sus objetivos en cualquier de esos espacios. Apostaron entonces a su capacidad de movilización y a una alianza posible con sectores radicalizados e igualmente indignados, de la oficialidad joven de las Fuerzas Armadas. Quienes conocen de cerca las organi-

zaciones indígenas saben que no se trató de una posición alentada por la dirigencia nacional del movimiento. Los dirigentes fueron literalmente “arrastrados” hacia posturas radicales por la indignación de esas mayorías arrojadas a la miseria más indignante

y que se encuentran en el límite de su resistencia física y social.

Pero explicarse el origen de la consigna no es hacerla más viable. En la práctica ella era tres veces imposible. Primero, sobrestimó la capacidad de movilización propia. Segundo, sobrestimó el posible compromiso político del Ejército. Finalmente, como resultado, fue incapaz de reconocer las debilidades estructurales que asediaban a los conjurados: la debilidad regional y la debilidad internacional.

La movilización fue fuerte, pero careció del respaldo masivo de los sectores urbanos y medios que había caracterizado al movimiento tres años antes. Esto podía advertirse desde diciembre, pero fue inmediatamente perceptible luego del anuncio de la dolarización, el 10 de enero del nuevo siglo. A inicios de año todo parecía perdido para Mahuad. La discusión no era si el Presidente caía o no sino con qué fórmula se lo sustituiría. Existían básicamente tres opciones: el Partido Social Cristiano abogaba por una renuncia del Presidente de la República que permitiera la sucesión del Presidente del Congreso. Puesto que le resultaba difícil hallar la fórmula legal para hacerlo terminó optando por una sucesión del vicepresidente, con quien podría llegar a un acuerdo⁹. La segunda era la promovida por los movimientos sociales y la CONAIE: la formación de un gobierno popular, con sustento militar, luego de la renuncia o disolución del poder ejecutivo, legislativo y judicial. La tercera era un autogolpe de Mahuad; solución mencionada durante los días iniciales de enero y confirmada luego de la crisis por las declaraciones públicas del general Mendoza. Las dos últimas eran las de menor viabilidad política.

El anuncio de la dolarización cambió momentáneamente las piezas del tablero. El anuncio contradecía el propio juicio anterior del Presidente y el juicio de muchos de los técnicos del Banco Central y del Presidente de su Directorio. Todo indica que se trató de una maniobra improvisada para mantenerse en el cargo¹⁰. Pero el precio es muy alto para el futuro: una “*fuite en avant*” radical del proceso de ajuste estructural¹¹. Mahuad desconcierta al país: la dolarización parece permitirle recomponer el bloque de poder, parece darle “aire” al gobierno y reconstruir su perdida relación amorosa con la prensa quiteña. Además, el anuncio de la dolarización tiene un efecto “estabilizador” sobre el tipo de cambio y las tasas de interés y con ello generó un efecto

“desmovilizador” en especial sobre las clases medias de las principales ciudades. Este sector se mantuvo “a la expectativa” de lo que pudiera ocurrir. Junto a ello se lanzó una campaña de información y propaganda sobre el desastre de “volver atrás”. Se juega con el miedo a la hiperinflación¹².

Ante este sorpresivo y radical anuncio, la dirigencia social es incapaz de cambiar la táctica ni la consigna de la movilización. Sigue apostando a una salida propia que no signifique una repetición del 5 de febrero. La memoria está muy fresca. La inflexibilidad tiene todo el aspecto de ser dictada por un análisis insuficiente. Pero en realidad la apariencia es falsa: auténticamente las bases presionan a los dirigentes para evitar todo tipo de negociación. Se admite y se confía en el poderío de la propia fuerza de movilización. Algunos confían también en los lazos con el ejército y su posible compromiso con un cambio radical. En algunos la confianza es ciega. En otros acecha la duda, pero para ambos grupos la vuelta atrás parece imposible. Todo cambio en la voz de orden se asemeja a una traición. No se encuentra (¿no se busca?) una fórmula alternativa para enfrentar la nueva coyuntura política creada por el discurso presidencial del 10 de enero. El resultado es que cuando se desató la movilización final, ésta creció continuamente sin llegar a ser masiva. La falta de apoyo activo a la protesta, a pesar del prestigio del movimiento indígena e incluso de la simpatía existente, desplazó toda la resolución de la crisis, más claramente aún que pocos días antes, a la intervención de las Fuerzas Armadas.

Pero allí también, la CONAIE y la Coordinadora de Movimientos Sociales sobrestimaron su capacidad de decisión. Un compromiso decidido con un nuevo orden era imposible para las Fuerzas Armadas al menos por tres razones. La primera y más conocida, el aislamiento internacional de semejante gobierno popular. Esto es algo que llegó a ser decisivo en los momentos cruciales de la crisis, como lo dejan entrever las declaraciones del alto mando y del general Mendoza. La segunda era la ruptura regional evidenciada por un movimiento que careció de cualquier sustento costero. Semejante aventura amenazaba una guerra civil, o, como anunció León Febres Cordero, líder social cristiano y Alcalde de Guayaquil, en los momentos culminantes de ese inagotable día viernes, la secesión de Guayaquil. La tercera era el enorme riesgo institucional para las Fuerzas Armadas de hacerse cargo del país en las desastrosas condiciones económicas en las cuales semejante gobierno hubiera recibido la nación. Por lo demás, un giro radical de la política económica y una alianza fuerte con el movimiento indígena para formar un gobierno popular está muy lejos de despertar el consenso uná-

me de los militares ecuatorianos, por mucho malestar que haya despertado la crisis económica, la indignación por la complicidad gubernamental con el atraco bancario y el desastroso manejo de los últimos gobiernos¹³.

Al margen del malestar interno, del eventual compromiso de algunos oficiales y de la simpatía que las organizaciones indígenas y sus dirigentes pudieran despertar; el movimiento pidió demasiado a las Fuerzas Armadas o incluso a sus sectores más radicales. Tal vez un análisis sereno de los principales dirigentes lo hubiera reconocido en los momentos más decisivos. Pero en condiciones de rebelión social, la audacia supera la previsión, los participantes recuperan su capacidad de soñar despiertos y los sectores más desamparados, quienes no tienen nada que perder, son capaces de arrastrar tras de sí a las dirigencias vacilantes. El optimismo de la voluntad enceguece en esos instantes difíciles, el rigor pesimista de la inteligencia¹⁴.

El día jueves 20 de enero, el cerco al Congreso que habían hecho los manifestantes se radicaliza por la intervención de las bases indígenas de la provincia de Cotopaxi. El viernes 21, mediante un golpe de audacia fuerzan el cerco militar y con la ayuda de los militares acantonados en la zona, ocupan el edificio del Congreso Nacional, la Contraloría y la Corte Suprema de Justicia. A mediodía, las Fuerzas Armadas le piden al Presidente de la República su renuncia como una fórmula para hacer viable una salida constitucional a la crisis. Al hacerlo, al pedir públicamente la renuncia de su Comandante en Jefe, han violado de facto la Constitución. Mahuad impide el maquillaje institucional cuando en horas de la tarde se niega a renunciar.

■ “El comienzo” Una vuelta al mundo de ese día

Por segunda vez en tres años un movimiento popular provoca la caída de un Presidente electo en las urnas. La violencia ha estado prácticamente ausente de ambos episodios. Ambos combinaron una movilización social, indígena y popular con una especie de “arbitraje” militar. Ambos se desplegaron en una sociedad corroída por una crisis económica interminable y por el desprestigio del régimen político y sus representantes. ¿Qué pasó y dejó de pasar para que todo se repita?

La victoria de Abdalá Bucaram en 1996 estuvo precedida por un hecho importante para el régimen político: la entrada en la escena electoral de las organizaciones indígenas. Su salida, en 1997, fue seguida de un proceso de cam-

“Por segunda vez en tres años un movimiento popular provoca la caída de un Presidente electo en las urnas. La violencia ha estado prácticamente ausente de ambos episodios. Ambos combinaron una movilización social, indígena y popular con una especie de “arbitraje” militar. Ambos se desplegaron en una sociedad corroída por una crisis económica interminable y por el desprestigio del régimen político y sus representantes. “

bios institucionales notables y de la redacción de una nueva Constitución en donde se recogieron muchas reivindicaciones de participación política y consagración de derechos sociales y colectivos¹⁵. Al mismo tiempo, como si no fuera contradictorio, la Constitución reforzó los poderes presidenciales y limitó la capacidad de fiscalización e intervención del Congreso Nacional en la política económica. Fue la propuesta aprobada para salir al paso del dilema de la “governabilidad”, donde residía supuestamente la causa de los males nacionales: la incapacidad de llegar a acuerdos, el “canibalismo político”, la miopía de la clase política¹⁶.

El enigma se vuelve entonces más profundo. La crisis se perpetúa a pesar de estar viviendo desde 1995 un proceso doble de “ingreso” de sectores marginados en el régimen político, de inclusión de muchas de sus demandas en el ordenamiento jurídico nacional, y de reforzamiento de las provisiones políticas y jurídicas que permiten al Presidente de la República manejar la política económica sin las incómodas interferencias del Congreso¹⁷.

En realidad, “la calentura no está en las sábanas”. Mi hipótesis es que el Ecuador no vive una crisis de gobernabilidad. Es falsa la imagen de un país y una “clase política” encerrada en sí misma, incapaz de negociar, agazapada en el autoritarismo y los intereses de grupo. Esta generación de políticos, en la misma tradición de sus antecesores, vive, por el contrario, de una larga historia de negociaciones. Exactamente a la inversa de esa imagen “canibalística” de las dirigencias políticas¹⁸, incapaces de conseguir acuerdos, creo que tenemos un régimen político habituado a negociar todo. Prácticamente nada es lo suficientemente sagrado para escapar a una negociación política en Ecuador. Durante décadas esos mismos políticos, que se quejan de la falta de gobernabilidad, han alabado la tradición “pacifista” del país pero nunca la han relacionado con la flexibilidad del régimen político y su tradición negociadora. ¿Cómo explicar de otra forma la falta de conflictos abiertos, de luchas radicales, de guerras civiles, de desangramientos fratricidas? El caso es más sorprendente cuando comparamos este país con sus vecinos inmediatos, sumidos en espirales de violencia y autoritarismo sangriento. Las estructuras sociales y las exclusiones estructurales en Ecuador son seculares y no muy diferentes de las existentes en el resto del continente. Y sin embargo, de su vida política ha estado ausente la violencia más descarnada. Ecuador ha sido un país que ha exhibido una “clase política” maestra en el arte de la negociación y la flexibilidad¹⁹. Nótese que la legislación sorprendentemente liberal y progresista del Ecuador ha sido aprobada muchas veces por partidos adscritos a la derecha política. La propia Constitución de 1998 es un buen ejemplo: la mayoría de constituyentes pertenecían al Partido Social Cristiano y a la Democracia Popular. Tenemos, pues, una clase dominante sorprendentemente dispuesta a aceptar cambios en sus sistemas de dominación y muy particularmente en su régimen político. No son necesarias grandes guerras ni des-

garramientos sangrientos para aceptarlo. Las transformaciones legales se aceptan al comienzo, no al final de un proceso de cambio.

Para muestra, un botón. Durante las horas difíciles del día viernes 21 de enero, el general Carlos Mendoza recibió una llamada indignada desde Estados Unidos. ¿Cómo era posible que se le pidiera al Presidente Constitucional de la República la renuncia cuando ni siquiera había regimientos sublevados, no se había disparado un tiro y ninguna gota de sangre había corrido por las calles? Para ciertas tradiciones políticas, pedir la renuncia del Comandante en Jefe es el extremo de los extremos, cuando ya sólo quedan entre manos salidas desesperadas. En Ecuador parecía más fácil sacrificar al Presidente que aceptar un conflicto irreparablemente violento. El general dice haber respondido que “ellos” (los norteamericanos) no entienden al Ecuador. Lo que estamos tratando, habría dicho, es precisamente evitar un derramamiento de sangre²⁰.

¿Cuál es el origen, algo extraño, de este comportamiento inusual? Solo propongo dos hipótesis preliminares. El Ecuador es un país cuyas clases dominantes han tenido que acostumbrarse a una negociación permanente de sus cuotas de dominación. La fractura regional, la casi inexistencia de clases hegemónicas a nivel nacional, las ha llevado a hacer de la negociación entre sí, la condición de su supervivencia y del manejo unificado del Estado. Pero además, la renta petrolera, que desde 1972 alimentó la autonomía estatal, ofreció una base para negociar sin perder. La distribución de las rentas estatales se convirtió en la materia de la negociación pero también en la condición de posibilidad de un reparto donde cada cual pudiera tener su “pequeña satisfacción” (la frase pertenece a Bustamante 1997) sin arrancársela al vecino. El modelo de Estado petrolero confirmó una tendencia histórica y se adaptó a una vieja tradición política.

La segunda hipótesis es que esta extraordinaria flexibilidad del Estado y del sistema político para “mutar” y adaptarse ante nuestros ojos, ese “camaleonismo” que hemos analizado a lo largo de estas páginas, parece haber nacido, sorpresivamente, de una debilidad más antigua y más hon-



da. En efecto, la sorprendente liberalidad y modernidad del sistema político para aceptar rápidamente ciertas demandas sociales que en otros países han desgarrado a sociedades enteras por décadas de enfrentamientos, le permite al Estado mutar y con ello hacer un acto de legitimación. Pero muta sin cambiar porque sus actos no son capaces de transformar a fondo el mundo de la vida. Los resortes del poder y del orden social se le escapan en muchos sentidos. El Estado ha buscado insistentemente extender su autoridad sobre todo el territorio y sobre todos sus habitantes. Lo ha hecho con toda la fuerza de un gigantesco presupuesto, mayor que el de cualquier actor aislado o asociado dentro de sus fronteras; lo ha hecho con la cobertura de un aparato administrativo que extendió sus redes hasta los sitios más apartados del país; con una extensión inédita de la prestación de servicios sociales a la población ecuatoriana. Pero las lógicas de funcionamiento social todavía le son ajenas. Todavía existe, al menos parcialmente, un país “real” distante de los formalismos legales; la ley (es decir, el Estado convertido en texto) no ha hecho carne en sus sujetos, no ha ingresado en sus hábitos, no se ha vuelto un factor incorporado en sus reacciones más espontáneas.

La fortaleza del Estado ecuatoriano deriva, pues, de su debilidad. De que es incapaz de controlar y dirigir los resortes de la vida social. Pero deriva también de la creencia que tienen los actores en su poder. Más precisamente, de la aspiración social, del deseo que tienen de que alguien controle de verdad, el rumbo de la vida. Sostengo que esta idea de un agente racional que conduce los hilos de la historia podría ser una infiltración profunda de la modernidad en la vida de los actores sociales, pero creo que tiene seguramente raíces más antiguas y más variadas. Puede rastrearse ya, de algún modo, en el viejo legalismo de las comunidades indígenas que resistían la sumisión al régimen colonial. Pero es claro que todos los actores reclaman hoy en día transformaciones legales al Estado cuando quieren darle a sus aspiraciones una forma colectiva y racional. Ese es el referente de todos quienes se vieron convocados y transformados por el proyecto de 1978; es el espacio omnipresente de una aspiración moderna: la de contar con un agente racional capaz de ordenar y ejecutar. Pero referirse al Estado es referirse también al proyecto modernizador en un sentido más profundo y secular: el de una voluntad social concentrada. El de la idea de que “alguien” dirige de verdad y que hacer una ley es dictar la voluntad soberana de la voluntad social. Los hombres tienen en la voluntad, uno de los resortes que mueven al mundo.

“Ami modo de ver, la crisis política del Ecuador es una crisis de aplicación del ajuste estructural. La llamaremos “crisis de legitimidad”. Empezó a resultar irresistible desde 1995, pero sus manifestaciones vienen acumulándose desde 1982. Ocurre que el ajuste exige un manejo autoritario de la política.”

Pero los actores son conscientes de la ilusión. Viven en ella y la tienen incrustada lo suficientemente profundo para que aparezca cada vez que convierten sus necesidades y sus difusas aspiraciones en un reclamo. Pero en el fondo de quienes actúan y negocian en la escena pública, así como de quienes manejan los hilos del régimen político y viven en sus intersticios; la debilidad estructural del Estado ecuatoriano salta a la vista. De esta manera se explica su extraor-

dinaria flexibilidad y su simultánea capacidad para seguir siendo el mismo. Ningún actor está dispuesto a jugarse por entero en la demanda al Estado porque éste no siempre (o casi nunca) es capaz de resolver el problema planteado. Toda demanda puede negociarse en el sistema político sin desgarraduras por-

que de todas formas deberá negociarse de nuevo, luego, en los espacios curvilíneos de la vida diaria. Todo se negocia en el sistema político en realidad porque nada se negocia allí en verdad²¹.

Pero estas explicaciones sólo nos ayudan a entender cómo fue posible el extraño desenlace en ese profético día viernes. Nos aclara cómo un movimiento popular fue capaz, otra vez, de destituir a un Presidente sin pagar la cuota de sangre de todas las revoluciones. Pero no nos explica por qué la crisis fue posible, por qué se resquebrajó el bloque de poder. Nos aclara el desenlace pero no nos dice nada sobre la naturaleza de la crisis política.

A mi modo de ver, la crisis política del Ecuador es una crisis de aplicación del ajuste estructural. La llamaremos “crisis de legitimidad”. Empezó a resultar irresistible desde 1995, pero sus manifestaciones vienen acumulándose desde 1982. Ocurre que *el ajuste exige un manejo autoritario de la política*. El ajuste no se negocia. No funciona si no se acepta en todas sus formas y consecuencias. No hay “políticas de ajuste a medias”. El ajuste es un “paquete” completo, compacto, calcado para todas las enfermedades de nuestro tiempo. Pero el Ecuador no tiene entre sus tradiciones la aceptación de esas salidas absolutas. Esto no quiere decir que sus clases dominantes no puedan crear esa nueva tradición y que la ausencia en el pasado de los horrores de una violencia política desenfrenada, la impidan para siempre en el futuro. Pero ocurre que hasta ahora su sistema político no ha sido capaz de procesar ese modelo autoritario que está obligado a aplicar desde hace 15 años.

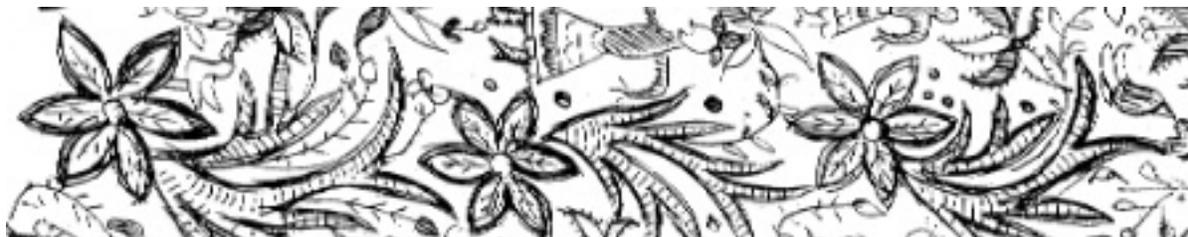
En efecto, el modelo de ajuste, suponiendo que sus promesas de crecimiento y felicidad general fuesen ciertas, sólo ve frutos a mediano y largo plazo. A corto plazo genera incertidumbre, temor, causa pérdidas de empleo, crea rece-

sión. A corto plazo hay quiebras de empresas, sometimiento a fuerzas externas que las empresas locales no pueden resistir. A corto plazo sólo sobreviven los grandes, los vinculados a los mercados externos, los sectores “competitivos”. A corto plazo la resistencia civil es enorme. El país no puede aceptar esos sacrificios de corto plazo en nombre de la salvación futura. Los partidarios del ajuste deben imponerlo con mano dura, tal como lo han hecho en todos los países de América Latina. Pero la tradición negociadora de las clases dominantes del Ecuador se estrella contra esas salidas tecnocráticas y autoritarias. Se encuentra atada de manos ante la quiebra del Estado, el fin de la bonanza petrolera y la imposibilidad de negociar “pequeñas satisfacciones” entre élites locales, regionales y organizaciones sociales cada vez más poderosas y exigentes. No se aceptan las políticas de ajuste porque en el pasado siempre han sido sometidas a negociaciones parciales. Como resultado, en un ambiente hostil y desconocido, el régimen pierde legitimidad.

Así, pues, la crisis no está en la falta de acuerdos de gobernabilidad sino en el desajuste de las políticas de ajuste con el tradicional modelo de gobernabilidad ecuatoriana. Esas “salidas a medias”, esos acuerdos lentos, esos avances por caminos retorcidos, esa tradición andina de chaquiñanes indirectos, se acopla mal a las recetas económicas de los yuppies egresados de las escuelas de Chicago. Este régimen político y esta gobernabilidad ecuatoriana no han podido resolver las más infames exclusiones estructurales de la so-

ciudad. Al contrario, las mantiene y las reproduce. Pero, al mismo tiempo, puede mostrar también los éxitos de una historia flexible que ha eludido hasta ahora los enfrentamientos extremos.

El movimiento del 21 de enero es parte de esta historia y esta tradición. Es un suceso atacado por los voceros de la “opinión pública”. Se ha dicho que afecta “nuestra imagen internacional”, que confirma la anarquía en la que vivimos, que resalta la inmadurez de nuestra vida política. Yo quiero levantar acta, para terminar, y en contra de esas voces autorizadas, de las tradiciones democráticas que este movimiento encarna. Encarna la rebelión contra un ajuste impuesto y contra sus consecuencias. Encarna también la audacia de quienes no tenían nada que perder y decidieron actuar sin cálculo estratégico pero con razón y autoridad moral. Jamil Mahuad apuntó al mejor valor del movimiento cuando fustigaba sus consecuencias horas después de que ese viernes hubiera concluido al fin: ¿qué futuro le espera, decía, al Ecuador, cuando el Presidente llega a ser un rehén de los movimientos sociales? Reivindico ese valor de la democracia: todo Presidente es responsable de sus actos y “prisionero” de la sociedad a la que se debe. No puede actuar en la impunidad. Una sociedad movilizada es la mejor garantía de una sociedad democrática. Pero el Ecuador no es una sociedad democrática, aunque siga buscando tercamente lo imposible, una y otra vez.



■ Notas

* Investigador del Instituto de Estudios Ecuatorianos, Quito, Ecuador.

1. Max Weber. 1972. La política como vocación. En Max Weber. *El político y el científico*. 3era edición. F. Rubio Llorente (trad.). Introducción de R. Aron. Madrid: Alianza Editorial. El libro de Bolsillo. p.178.

2. Usamos las etiquetas “derecha” o “izquierda” por comodidad expositiva (se entiende clara y rápidamente a lo que me estoy refiriendo) y porque guardan significados fuertemente arraigados en nuestra cultura política.

3. Como diría William Morris, socialista inglés del siglo pasado: “Examiné todas estas cosas, y cómo los hombres luchan y pierden la batalla, y aquello por lo que lucharon tiene lugar pese a su derrota, y cuando llega resulta ser distinto a lo que ellos proponían bajo otro nombre” .

4. En la “Carta de Intención” firmada con el FMI en abril de este año, el gobierno reconoce haber invertido hasta ahora 1.400 millones de dólares en el salvataje bancario. En ese mismo documento (párrafo 41) estima que el costo fiscal de la crisis financiera llegará a 2.960 millones de dólares en emisiones de bonos, transferencias en efectivo y en intereses (esto es, el 26,4% del PIB).

5. Ver al respecto las notas periodísticas aparecidas en el diario El Comercio, de los días sábado 22 y domingo 23 de enero de 2000; y sobre todo, la serie de entregas sobre la crisis que se publicaron a partir del 19 de marzo.

6. Siguiendo las notas de prensa, cuando Mahuad recibió la solicitud de renuncia que el Alto Mando le hacía, ese tenso mediodía del 21 de enero, inmediatamente le reprochó a Mendoza el no haber tomado las medidas necesarias contra el coronel Lucio Gutiérrez (cabeza visible de la rebelión de coroneles) a pesar de haber sido advertido semanas atrás.

7. Las referencias a una “nueva revolución juliana” hechas por el coronel Lucio Gutiérrez está llena de paralelismos: el poder ilimitado de la banca en la economía y la política nacional, la insurrección de los mandos medios, el carácter “serrano” de la base social del movimiento, entre otros. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas, por lo demás, han estado comprometidas en las principales transformaciones modernizadoras del siglo XX: la revolución juliana de 1925, la Reforma Agraria de 1964 y la modernización reciente durante los años setenta. En todas ellas el rol del Estado ha sido relevante.

8. Los intentos por “disimular” legalmente estas sucesiones incómodas no las hacen menos ilegales.

9. En el mes de diciembre hubo polémicas públicas sobre este tema entre Gustavo Noboa y el líder socialcristiano Jaime Nebot.

10. Algo también ampliamente reconocido por los analistas económicos internacionales (ver los resúmenes de algunos de estos análisis en Líderes. Semanario de Economía y Negocios. Año 2 No. 118. 24 de enero de 2000, Quito, pp, 7-9). La carta de renuncia de Pablo Better, ex Presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador, opuesto a la medida, confirma que la decisión fue improvisada.

11. La dolarización es un esquema monetario tan rígido y económicamente tan inviable en una economía y una situación como la ecuatoriana, que es probable que finalmente se busque algún camino intermedio para lograr el verdadero propósito: profundizar las políticas de ajuste (Ver Alberto Acosta. 2000. La trampa de la dolarización. Mitos y realidades para la reflexión. En A. Acosta y J. Juncosa (comps.). *Dolarización. Informe Urgente*. Quito: ILDIS/Abya-Yala/UPS. p. 14-7).

12. El discurso del “único camino posible” fue usado y abudado por Mahuad, en muchas materias en las que finalmente dio marcha atrás (como la Ley de la AGD o el impuesto del 1% a la circulación de capitales).

13. La ruptura institucional pareció afectar, por lo demás, solamente al Ejército. La Fuerza Aérea y la Marina no dieron señales públicas de adhesión al movimiento.

14. La frase, retomada de los Cuadernos de la Cárcel, de Antonio Gramsci, se atribuye generalmente a Romain Rolland y representaba, para el pensador y político italiano, la esencia de la militancia revolucionaria: “pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad”

15. La Constitución de 1998, tal vez la más progresista de la historia ecuatoriana, incluye, entre otras disposiciones, la posibilidad de la revocatoria del mandato de varios de los funcionarios electos, la posibilidad de convocar a consultas populares (nacionales o subnacionales) por iniciativa ciudadana, incluye derechos colectivos de pueblos indígenas, afroecuatorianos, así como radicales provisiones para la descentralización y las autonomías étnicas.

16. El argumento ha sido repetido incansablemente a lo largo de la década en círculos académicos y políticos. El más importante exponente de esta visión de las cosas ha sido Oswaldo Hurtado, ex presidente, fundador del partido de gobierno, la Democracia Popular (Democracia Cristiana) y ex Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la

Constitución de 1998. De hecho, en su discurso inaugural ante la Asamblea, Hurtado insistió en este diagnóstico de la política y la economía nacional. No debe olvidarse que el propio Hurtado fue también miembro de la “Comisión de Constitución”, que en 1977 y 1978, previo al fin de la dictadura, redactó la Constitución anterior.

17. Algunas de las provisiones destinadas a asegurar la “governabilidad” son: sólo el Presidente tiene iniciativa legislativa en materia tributaria, de gasto público y de división político-administrativa del país, autonomía del Banco Central, imposibilidad del Congreso de destituir a los ministros, ratificación del sistema electoral de mayorías simples para la distribución de puestos en las elecciones pluripersonales (diputados y miembros de gobiernos seccionales).

18. La expresión “canibalismo político” se hizo famosa durante la defensa del destituido vicepresidente Alberto Dahik a fines de 1995.

19. De hecho, la capacidad de gobernar negociando en el Ecuador viene desde muy lejos. Muestras de esta flexibilidad del Ecuador son el laicismo (desde inicios de siglo), la educación pública, el voto femenino (desde 1929), la legalización de la unión libre (1982), la despenalización de la homosexualidad (1997). El origen e inspiración de esta idea puede encontrarse en Fernando Bustamante. 1997. Una aproximación a los problemas de la gobernabilidad y la democracia en el Ecuador de fin de milenio. En Ecuador Debate. No. 42 Quito: CAAP. Diciembre.

20. El mismo horror al conflicto armado entre militares ecuatorianos apareció en muchos episodios anteriores, como la sublevación de Frank Vargas Pazzos en marzo de 1986 o de los comandos que en 1997 secuestraron al entonces Presidente León Febres Cordero. Las referencias a la anécdota provienen del relato de los acontecimientos preparado por el diario El Comercio, de Quito, a fines de marzo. La fuente es presumiblemente el propio general Mendoza.

21. Las ideas expresadas en los últimos tres párrafos han sido desarrolladas en dos textos anteriores, a los que remito al lector interesado. Pablo Ospina. 1999. “Reflexiones sobre el transformismo. Movilización indígena y régimen político en Ecuador”. Quito: FLACSO. En prensa (Memorias del Seminario sobre Movimientos Sociales en los países Andinos, noviembre; y 1998. “La deriva de una promesa. Democracia y Modernización en el Ecuador 1978-1998”. Quito: Inédito.

